



FEDERAL DE CENTROS DE ESTUDIOS
DE ORGANIZACIONES POPULARES

Hacia una red federal de Centros de Estudio de organizaciones populares

De la catástrofe y corrupción de Milei a la recuperación del país, la justicia social y la soberanía

1. Un proyecto de reestructuración reaccionaria y profundización del capitalismo neocolonial

Las organizaciones populares y el movimiento obrero argentino enfrentamos hoy una ofensiva de reestructuración reaccionaria del capitalismo, encabezada por el gobierno de Javier Milei y articulada con la estrategia global del imperialismo norteamericano bajo la presidencia de Donald Trump, en alianza con el Estado terrorista de Israel gobernado por Benjamín Netanyahu. No estamos ante un experimento aislado: se inscribe en una oleada mundial de derechas radicalizadas que buscan imponer, por vía económica, institucional y represiva, un nuevo ciclo de acumulación basado en la superexplotación del trabajo, el saqueo de bienes comunes y la destrucción de las capacidades estatales. Que en el caso particular de Argentina y Latinoamérica toma el carácter de un neocolonialismo extremo que destruye la soberanía.

En Argentina, ese plan se condensa en un paquete normativo e institucional agresivo: el DNU 70/2023, que desregula masivamente la economía, flexibiliza las relaciones laborales, abre sectores estratégicos al capital concentrado y barre con regulaciones conquistadas por décadas de lucha; el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el anunciado “Súper RIGI”, que otorgan beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos extraordinarios a las grandes corporaciones, especialmente extractivas, y consolidan una inserción subordinada del país como proveedor primario de recursos y energía; y una política exterior de alineamiento automático con los Estados Unidos e Israel, que refuerza la dependencia financiera, militar y diplomática.

En nombre de un supuesto “equilibrio fiscal” y de una “modernización” que en realidad es un retorno brutal a las recetas más regresivas del neoliberalismo, el gobierno impulsa un ajuste feroz sobre salarios y jubilaciones, recorta gasto en educación, salud, ciencia y políticas sociales, frena la inversión pública, ataca la

obra pública y recorta transferencias a las provincias, al tiempo que promueve privatizaciones y concesiones sobre activos estratégicos. La prioridad no es la vida de nuestro pueblo, sino garantizar ganancias extraordinarias a los grupos económicos locales e internacionales y asegurar el pago de una deuda ilegítima y odiosa.

No se trata de una administración “austera”, sino de un gobierno de destrucción y saqueo. El uso abusivo de decretos, la cooptación y presión sobre el Poder Judicial, el disciplinamiento, chantaje o compra de muchas/os legisladores o gobernadores y la ofensiva contra el derecho a la protesta forman parte de una misma ingeniería política: desmontar las conquistas históricas del movimiento obrero y popular, reorganizar el Estado como garante de negocios privados del capital más concentrado transnacional y desarticular toda capacidad de respuesta organizada. Esa ofensiva, que combina ajuste, desregulación, represión y propaganda, busca quebrar la cultura solidaria y colectiva que nuestras clases trabajadoras construyeron a través de más de un siglo de luchas.

Ese diseño reaccionario vacía la democracia, utiliza la crisis de representación para negar la política, promueve un desplazamiento del poder que niega el congreso y las provincias y lo traslada a los mercados financieros y las corporaciones globales.

La extendida corrupción en el gobierno nacional muestra que enfrentamos un sistema creado para instrumentar esa remodelación del país. El poder concentrado dio el apoyo a un grupo sin historia ni responsabilidad para impulsar su programa y eso derivó en la conformación de una banda criminal que se vale del estado y parte central de aparato judicial.

2. La catástrofe industrial, social y financiera

La aplicación de este programa ha desatado una catástrofe industrial, social y financiera de carácter planificado, que golpea especialmente a la clase trabajadora, a los sectores populares y a las economías regionales. La apertura importadora, la caída deliberada del mercado interno, las tarifas dolarizadas y las tasas de interés usurarias, combinadas con la ausencia de cualquier política industrial o de protección del trabajo, han provocado el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, el desguace de ramas enteras de la industria y la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo registrados.

En términos concretos, desde diciembre de 2023 hasta el presente cerraron alrededor de 30.000 empresas —en su gran mayoría pymes— y se perdieron unos 411.000 puestos de trabajo asalariados registrados, muchos de los cuales fueron reemplazados por formas precarias de empleo independiente o monotributo, sin protección social efectiva.

En este contexto, la superexplotación se convierte en norma: millones de trabajadoras y trabajadores se ven obligados a sostener dos o más empleos informales, changas o emprendimientos de subsistencia para cubrir gastos básicos.

El salario mínimo, las jubilaciones y las prestaciones sociales han sufrido un derrumbe histórico en términos reales, empujando a la pobreza a sectores que hasta hace poco se consideraban parte de las capas medias trabajadoras. El resultado no es solo una caída del poder adquisitivo: es una degradación integral de las condiciones de vida y de trabajo.

Sobre esa precarización se monta un endeudamiento cotidiano de los hogares. Ante la insuficiencia de ingresos y el encarecimiento de la canasta básica y los servicios, las familias recurren a tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos informales y plataformas fintech para comprar alimentos, medicamentos y pagar tarifas. El llamado “endeudamiento circular” —tomar un nuevo crédito para pagar el anterior— se vuelve rutina y transforma la reproducción de la vida en una carrera perpetua detrás de tasas e intereses definidos por bancos, financieras y grandes cadenas comerciales. Se socializa la angustia, se privatizan las ganancias.

La falta de recomposición salarial frente al aumento de los gastos fijos ha llevado la morosidad en los créditos personales y las tarjetas de crédito a los niveles más altos desde que existen registros oficiales comparables: según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ratio de irregularidad de los hogares se triplicó entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

En paralelo, la deuda externa bruta del país alcanza niveles récord, profundizando nuestra condición de semicolonial. Según el INDEC, durante la gestión de Javier Milei la deuda externa bruta a valor nominal aumentó USD 35.832 millones, hasta ubicarse en torno a los USD 320.305 millones al cierre de 2025 —el nivel más alto desde que se iniciaron las series históricas en 1994—. Si se incorpora el stock total de la deuda pública, incluida la deuda interna intra-Estado, el incremento estimado supera los USD 113.000 millones, llevando el total a cifras cercanas a los USD 483.000 millones, según análisis de economistas críticos del oficialismo.

El gobierno de Milei profundiza las ataduras del endeudamiento y el cogobierno con el FMI, comprometiendo recursos presentes y futuros para sostener un esquema de valorización financiera que nada tiene que ver con las necesidades de nuestro pueblo. La combinación entre endeudamiento público externo, endeudamiento privado de los hogares y endeudamiento de las propias organizaciones populares configura una verdadera “triple cadena” que busca disciplinar a la sociedad y reducir su capacidad de resistencia.

A esta ofensiva se suma la transformación acelerada del trabajo por la inteligencia artificial. La IA ya reorganiza procesos productivos, servicios, administración pública, comunicación, educación, finanzas y comercio. Puede aumentar capacidades sociales y mejorar tareas si se orienta con criterios públicos, democráticos y soberanos; pero, bajo control de grandes plataformas y corporaciones, también puede profundizar despidos, intensificación del trabajo, vigilancia algorítmica, sesgos discriminatorios y dependencia tecnológica. Por eso, la discusión sobre empleo, industria y derechos laborales debe incorporar una estrategia nacional de

IA al servicio del pueblo, con participación sindical, regulación estatal, protección de datos y formación tecnológica para trabajadoras y trabajadores.

«En abstracto, esta [la tecnología], en sí misma, no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí; pero, **concretamente, no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza**» señala en la encíclica Magnifica Humanitas el Papa León XIV, y mas adelante reflexiona «...pequeños grupos muy influyentes pueden **orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio**, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos»

La crisis golpea con especial dureza a las mujeres. La brecha salarial, la mayor presencia en trabajos informales o peor remunerados, la sobrecarga de tareas de cuidado no pagas y la violencia económica reducen sus ingresos presentes y sus derechos futuros. En materia previsional, la discusión sobre la moratoria jubilatoria tiene un impacto particularmente sensible: muchas mujeres no completan treinta años de aportes registrados no por falta de trabajo, sino porque el mercado laboral y la organización social de los cuidados las expulsaron o precarizaron. Sin una política de reconocimiento de esas trayectorias, la vejez de millones de mujeres queda expuesta a la pobreza y a la dependencia.

El ataque al sistema previsional, la pérdida de poder adquisitivo de los haberes, el encarecimiento de medicamentos, alimentos, alquileres y servicios, y la incertidumbre sobre la continuidad de mecanismos de inclusión jubilatoria golpean a una población que ya entregó décadas de trabajo formal, informal, doméstico y comunitario.

Nada de esto es un daño colateral. Destruir la industria nacional, precarizar el trabajo, transferir recursos desde los salarios a las ganancias, quebrar la moral de las y los trabajadores y endeudar a las familias hasta la asfixia es parte constitutiva del proyecto: hace más baratas las condiciones de inversión para el capital transnacional y debilita las bases materiales de cualquier alternativa política y social.

3. Escenario regional, subordinación y lucha de clases

La política interna del gobierno de Milei se inscribe en una ofensiva regional más amplia. América Latina vuelve a ser un laboratorio donde el imperialismo ensaya nuevas formas de dominación: tratados de libre comercio, regímenes especiales de inversiones como el RIGI, dispositivos de “seguridad cooperativa” como el llamado “Escudo de las Américas”, bases militares y acuerdos de defensa que refuerzan el control sobre nuestros territorios y recursos. A ello se suma una batalla cultural que busca legitimar el odio hacia las organizaciones populares, los movimientos feministas, ambientales y de derechos humanos, y presentar el individualismo extremo como única opción posible.

La ofensiva en Argentina dialoga con procesos similares en Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y otros países del Sur global, donde las derechas neoliberales

intentan recuperar lo perdido y avanzar más allá, aplicando ajustes salvajes, criminalizando la protesta y promoviendo reformas laborales y previsionales regresivas. La respuesta no puede ser solo nacional: requiere construcción de alianzas regionales entre sindicatos, movimientos sociales, fuerzas políticas y redes de investigación crítica.

La alineación automática con los Estados Unidos y la subordinación a organismos multilaterales nos atan a su peor versión del poder imperial. La alternativa no pasa por cerrarnos, sino por construir otra inserción internacional, basada en la cooperación entre pueblos, en la integración regional soberana y en la defensa común de los bienes comunes frente al capital transnacional. Para eso, necesitamos capacidad de análisis propio, información sólida, articulación con centros de estudio y movimientos de otros países, y una política internacional del movimiento obrero y popular que no quede reducida a gestos simbólicos.

4. La tarea que nos convoca: programa y poder popular

Enfrentar este escenario implica que las organizaciones populares recuperemos una tradición que nunca se perdió del todo: la elaboración programática propia. No alcanza con resistir medida por medida; debemos discutir qué país queremos, qué modelo productivo nos proponemos, qué papel debe jugar el Estado, cómo se distribuye la riqueza, cómo se garantiza el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a una vida libre de violencias. **Proponernos un modelo social alternativo.**

Ese programa tiene que partir de las luchas ya existentes y articularlas en un horizonte común de liberación social. Debe integrar las demandas del movimiento obrero, de los feminismos populares, de las juventudes, de las diversidades, de los pueblos originarios, de campesinas y campesinos, de las cooperativas, de las pymes de las asambleas socioambientales y de los colectivos culturales. No como una sumatoria de reclamos, sino como una visión integral de justicia social, democracia real y soberanía.

Y debe apoyarse en una democracia que no se agote en lo electoral: una democracia de base, donde las organizaciones libres del pueblo construyan la decisión desde abajo. Ese es el sentido de hablar de poder popular: la capacidad de las clases subalternas de organizarse, producir conocimiento, intervenir en la economía y disputar el rumbo del Estado y de la sociedad.

5. Para qué una red federal de Centros de Estudio de organizaciones populares

En este contexto, la construcción de una red federal de Centros de Estudio de organizaciones populares no es un lujo ni un apéndice: es una necesidad estratégica. El capital cuenta con sus tanques de pensamiento, sus consultoras, sus centros de lobby, sus estudios y sus medios. El movimiento obrero y popular

necesita su propia infraestructura de producción de conocimiento, su propia red de think tanks militantes.

El objetivo central de esta red es articular investigación e intervención al servicio de la clase trabajadora y de los sectores populares. Eso significa producir conocimiento situado sobre los problemas concretos de los territorios —despidos, cierres de empresas, endeudamiento, conflictos ambientales, violencia institucional, precarización laboral, reformas regresivas— y, al mismo tiempo, elaborar análisis rigurosos de la coyuntura económica, social y política, que alimenten la elaboración programática y las estrategias de lucha.

Las nuevas condiciones mundiales, latinoamericanas y nacionales exigen revitalizar el pensamiento crítico y la elaboración de un programa de transformación del país bajo el signo de reconquistar la soberanía plena y la liberación nacional y social. Es un desafío de protagonismo popular, de debate abierto, que pueda sentar las bases de las pautas programáticas una vez que se recupere el gobierno.

6. Qué entendemos por “federal” y cómo se organiza la red

Definimos esta red como “federal” no solo porque se extienda geográficamente, sino porque reconoce y organiza la diversidad de realidades, sujetos y experiencias que existen a lo largo y ancho del país. Argentina es diversa y compleja : hay cordones industriales reconvertidos, economías regionales devastadas, ciudades intermedias en crisis, periferias urbanas densamente pobladas, regiones agroexportadoras, zonas de frontera, comunidades campesinas e indígenas. Cada una de estas realidades exige miradas específicas.

La coordinación nacional de la red tiene que cumplir una función clara: articular, no sustituir. Su tarea es facilitar el intercambio de experiencias entre provincias y regiones, promover instancias de formación compartidas, sistematizar diagnósticos y propuestas, impulsar campañas nacionales basadas en el trabajo territorial e incorporar a la agenda cuestiones que requieren miradas suprarregionales (deuda, comercio exterior, integración regional, mar, ríos, energía, etc.).

7. Recursos, capacidades y memoria de lucha

Nuestro país no está condenado a la dependencia ni al saqueo. Contamos con recursos naturales, energéticos e hídricos que podrían sostener un modelo de desarrollo justo y soberano; con capacidades científicas, tecnológicas y universitarias de primer nivel; y con un pueblo que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de organización, creatividad y solidaridad.

Además, tenemos una memoria de lucha que es patrimonio estratégico. Desde las primeras huelgas de principios del siglo XX, la Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia rebelde, pasando por las experiencias programáticas de La Falda y de Huerta Grande, el programa de la CGT de los Argentinos, el “Modelo Argentino para el Proyecto Nacional” de 1974 y las “10 medidas urgentes para otra Argentina”

de las CTA; el Cordobazo, el Rosariazo y la serie de levantamientos de los años sesenta y setenta; hasta la resistencia al neoliberalismo de los años noventa y la rebelión de 2001, nuestro pueblo ha producido pensamiento, organización y programa. Esas tradiciones —anarquista, socialista, comunista, peronista, feminista, latinoamericanista— son materiales vivos que debemos leer, discutir y actualizar.

Una red de centros de estudio impulsada por las organizaciones populares puede ser el espacio que organice esa memoria, la ponga en diálogo con las nuevas luchas y la convierta en herramienta para pensar el presente y el futuro. No para repetir fórmulas, sino para recuperar la certeza de que es posible vencer, transformar, construir otros modos de producir y vivir.

La construcción de una red federal de Centros de Estudio de organizaciones populares es una apuesta a la inteligencia colectiva de nuestro pueblo y a la capacidad histórica del movimiento popular de pensar por sí mismo. Por eso, invitamos a todas las organizaciones sindicales, territoriales, campesinas, cooperativas, feministas, juveniles, estudiantiles y culturales de nuestro país a sumarse a este esfuerzo.

Proponemos que la red impulse procesos de debate y producción de conocimientos en cada territorio y sector: talleres, plenarios, escuelas de formación, investigaciones participativas, campañas de relevamiento.

Frente a la catástrofe planificada, la corrupción estructural y el intento de disciplinar a nuestro pueblo mediante el miedo, el hambre y la deuda, respondemos con organización, patriotismo e internacionalismo, solidaridad de clase y pensamiento crítico. La red federal de Centros de Estudio de organizaciones populares quiere ser una de las herramientas de esa respuesta: un espacio al servicio de la lucha por la soberanía, la justicia social y la liberación de nuestro pueblo.

Integran a la fecha la RED:

Instituto de Estudios y Formación CTA A – IEF

Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas – IPYPP – Unidad Popular

Instituto de estudios y formación para la igualdad - IEFI

Instituto Independencia

Fundación Acción para la Comunidad - FAPC

Instituto de Estudios sobre Estado y Participación – IDEP – ATE ARGENTINA

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales - CICSO

Federación de Trabajadores de la Energía de Rep. Arg. - FETERA

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas - FISYP

Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina - CEFJA

Red de Investigadores y organizaciones sociales de A. Latina RIOSALCLACSO/PIMSEP-UBA

Catedra libre Abel Bohoslavsky

Noticias de América Latina y el Caribe - NODAL

Centro de Estudios por la Soberanía Popular Mariano Moreno - CESOPMM

Centro de estudios e investigaciones sociales y económicas de Entre Ríos - CEISSER

Ateneo Neuquén

Red de investigadores sociales migrantes y refugiados

Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana - ISEPCI

Programa de Investigación sobre el Movimiento de la sociedad argentina - PIMSA

Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados

Revista Sagitario

Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti – CEFMA

Centro de Estudios sobre Comercio Exterior de la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén

Asociación Pueblo Unido por el Tren

Asociación Civil, Cultural, Social y Deportiva el TALA

-Septiembre 2026 -